


## Justificante de firma de documento

Fecha de generación: 11/01/2016 18:52

Nombre del documento: Resolucion\_4320

### Relación de firmantes

Datos del firmante	Grafo de firma manual	Fecha de firma	Información de firma
ANGELINA TRIGO PORTELA		11/01/2016 18:49	Firma

Este documento es un justificante de firma que permite recuperar el archivo de firma digital original (el único con validez legal) introduciendo el código CSV ubicado en el margen izquierdo en la siguiente dirección: 



Con fecha de 30 de diciembre de 2015 tuvo entrada en la Unidad de Información del Ministerio de la Presidencia solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentada por [REDACTED] con nº de D.N.I. [REDACTED] solicitud que quedó registrada con el número 001-004320:

*“Los planes de pensiones privados siguen existiendo porque no se ha derogado el art. 16 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas a favor de los exparlamentarios (plan de previsión social empresarial). Solicito acceder al Acuerdo no publicado de las Mesas de Congreso y Senado de 25 de enero de 2012 sobre suspensión de las aportaciones de las Cámaras a los planes de pensiones privados de los parlamentarios. Solicito acceder al contrato suscrito con BBVA por las Cámaras previo concurso público. Solicito el acceso a la totalidad de los contratos de todos los parlamentarios suscritos con BBVA. Subsidiariamente, solicito acceder a un contrato a modo de ejemplo, a fin de poder conocer todas las condiciones contractuales. Solicito la identidad de los parlamentarios y exparlamentarios que tengan suscritos dichos contratos de previsión social empresarial. Solicito información sobre la oficina de atención a parlamentarios en relación con el plan de previsión social empresarial, prevista en el pliego. En concreto: ubicación, financiación, funcionamiento, etc.”*

Con fecha 11 de enero de 2016 esta solicitud se recibió en la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información.

Una vez analizada la solicitud, esta Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la información que se solicita no se encuentra en la Administración General del Estado.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 y en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, **se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública** que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución.

A juicio de esta Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, son competentes para conocer la solicitud de acceso a la información que se inadmite mediante la presente resolución, el Congreso de los Diputados y el Senado, instituciones a las que deberá dirigirse el solicitante para recabar la información solicitada a través de los siguientes enlaces:

<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Transparencia/InfCiud/SolicitudDeInformacion>

<https://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/atencionciudadano/oficinadeinformacion/accesoinformacion/solicitud/index.html>

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.